



La promesa de AMLO de "barrer la corrupción de arriba hacia abajo" quedó en la retórica; en los hechos, la basura se multiplicó.



**LUIS CARLOS
UGALDE**

luiscarlosugalde@integralia.com.mx

Veintisiete sobre 100

Esta es la calificación que México obtuvo en 2025 en materia de corrupción según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, publicado ayer. La buena noticia es que México mejora en el margen respecto al año previo: de 26 sobre 100 subimos a 27. La mala es que seguimos reprobados y en el lugar 141 de 182 países.

Es la segunda peor calificación desde que se publica el índice en 1995; la peor fue el año pasado. En promedio, los siete años de la "cuarta transformación" son peores que los 18 de los gobiernos llamados "neoliberales": 29.4 puntos entre 2019 y 2025, frente a 32.7 entre 2001 y 2018. Incluso el gobierno de Peña Nieto –al que se calificó como el más corrupto– tuvo un promedio mayor que los morenistas, de 31.2.

La promesa de López Obrador de "barrer la corrupción de arriba hacia abajo" quedó en la retórica; en los hechos, la basura se multiplicó. Las razones son varias.

Primero, la lógica de la transacción política: cuando un nuevo grupo llega al poder y busca ganar y conservar elecciones a toda costa, pacta con aliados, adversarios, operadores y financiadores. Eso compra silencios, abre la puerta al dinero ilegal y genera compromisos que después se pagan desde el gobierno.

Segundo, la visión moralista de la lucha anticorrupción. Bajo el lema de "no somos iguales", se sustituyeron reglas por lealtades: se protege al cercano y se exhibe al adversario. Para preservar la cohesión interna, la ropa sucia se lava en casa y la corrupción se normaliza.

Tercero, el desmantelamiento de controles. Se debilitaron contrapesos y procedimientos con el argumento de no "estorbar" al Ejecutivo. La prioridad no era construir un sistema de integridad, sino concentrar poder, ganar elecciones y hacer la cuarta "transformación" bajo las órdenes del Presidente, cueste lo que cueste.

Un factor adicional fue un Congreso que –como en la etapa final del PRI hegemónico– dejó de vigilar. Desde 2018 abandonó su papel de contrapeso y la fiscalización del gasto se volvió más frágil: la Auditoría Superior de la Federación perdonó irregularidades, suavizó las observaciones y buscó complacer al Presidente, en lugar de someterlo al escrutinio legislativo.

Igual que en el pasado del PRI, del PAN y del PRD, gobernadores y alcaldes que llegaron cobijados por la marca Morena operaron con controles endebles. En varios estados, la cercanía entre política y crimen organizado parece haberse intensificado, ampliando el horizonte de corrupción: de la mordida administrativa a la captura territorial.

Así, el gobierno que prometió limpiar la corrupción "de arriba hacia abajo" terminó ocultando el polvo bajo la alfombra. Y esto afecta directamente una de las prioridades centrales de la presidenta Sheinbaum: atraer inversión privada y acelerar el crecimiento económico. Las empresas ya enfrentan costos elevados para operar en México: inseguridad, infraestructura deficiente y también licitaciones amañadas, sobornos para acceder a contratos públicos y extorsiones desde gobiernos locales, como ilustra el caso del exalcalde de Tequila que cobraba piso a las tequileras de Jalisco.

Durante décadas, organizaciones civiles, universidades y especialistas han repetido lo obvio: la única vía sostenible para contener la corrupción es construir instituciones de transparencia, auditoría, sanción y rendición de cuentas que funcionen incluso cuando incomodan al poder.

Pero muchos de esos controles se han desmontado. La erosión institucional no es abstracta: el Sistema Nacional Anticorrupción, creado en 2015 para coordinar esfuerzos del Estado, ha sido debilitado presupuestalmente. En el Presupuesto 2026, su Secretaría Eje-

cutiva sufrió un recorte de 95%: pasó de 128.8 millones a apenas 6.3 millones de pesos.

La mejora de una décima en el IPC de 2025 podría reflejar el cambio de gobierno en 2024 y mayor orden administrativo. Si es así, quizá marque el inicio de una tendencia. Pero también es posible que sea una simple oscilación estadística que no expresa un fortalecimiento real de la capacidad del Estado para prevenir, investigar y castigar la corrupción.

Si no se reconstruyen controles efectivos y contrapesos auténticos, la corrupción seguirá siendo uno de los problemas más graves del país, tal como decía López Obrador durante los 18 años que fue candidato opositor.